

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 14 de julio de 2020

Auto Interlocutorio No. \_\_\_\_\_

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76111-33-33-001-2014-00428-01
EJECUTANTE:	JAIME LIBREROS
EJECUTADO:	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NAIONAL – CASUR
ASUNTO	SOLICITUD ADICIÓN AUTO SEGUNDA INSTANCIA.

I. OBJETO DE LA DECISION

Decide la Sala la solicitud de adición del auto proferido por este Tribunal el día 25 de octubre de 2019, presentada por el apoderado judicial de la parte ejecutante.

II. ANTECEDENTES

EL AUTO CUYA ACLARACIÓN SE SOLICITA.

Mediante auto nro. 760 del 25 de octubre de 2019<sup>1</sup>, se resolvió confirmar el auto apelado, bajo los siguientes argumentos:

*“De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 446 del C.G.P, una vez ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución o notificada la sentencia que resuelve las excepciones, debe efectuarse la liquidación del crédito en la que se especifique el capital y los intereses adeudados por el ejecutado, de acuerdo con el mandamiento de pago.*

*La liquidación del crédito tiene por objeto concretar el valor económico de la obligación y está sujeto a la revisión del juez, quién puede aprobarla o modificarla, decisión contra la cual procede el recurso de apelación en el efecto diferido, Circunstancia que permite que el juez ordene la entrega a favor del ejecutante, de los dineros embargados que no sean objeto de la apelación, como se desprende el referido artículo.*  
*(...)*

*Así mismo , le corresponde en todos los eventos, al juez de la ejecución definir el monto del capital adeudado conforme a los estrictos lineamientos del mandamiento de pago y de la sentencia, pues es ahí donde se fijan los límites para establecer con claridad el valor de la obligación y es por ello, qué considera esta Sala de Decisión inoportuno hacer algún tipo de conjeturas referente al título Ejecutivo, que para el caso concreto se materializa con la sentencia donde debió estipular claramente los presupuestos de la obligación.*

*Descendiendo al caso concreto, lo primero que se debe indicar es que el personal de apoyo - Profesionales Universitarios Contadores - no presentan dictámenes, pues solo son personas que ilustran en aspectos técnicos contables a los distintos despachos judiciales y por tanto, es el juez (singular o plural) como director del proceso, quién debe en todos los eventos tomar la decisión sobre la forma de cómo liquidar el crédito mediante una providencia judicial.*

<sup>1</sup> Ver folios 175 a 178



*Aclarada la anterior situación, procederá esta sala de decisión a liquidar el crédito en debida forma, bajo los siguientes términos:*

*Mediante sentencia nro. 131 de fecha julio 8 de 2011, debidamente ejecutoriada el 12 de agosto de 2011, proferida por el Juzgado Primero administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, se ordenó a la caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reajustar la asignación de retiro al ejecutante en calidad de Agente ®, con la inclusión de la prima actualización a partir del 1 de enero de 1993, y hasta esta fecha en que estuvo vigente el decreto que estableció la prima actualización (31 de diciembre de 1995), sumas que serán indexadas mes por mes*

*(...)*

*El Gobierno nacional, a través de los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, fija los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales y Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, siendo la base para liquidar las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, y en el caso del ejecutante su asignación de retiro fue liquidada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, teniendo en cuenta el salario básico de un agente de policía cargo que ostentaba a la fecha de su retiro el cuál era el siguiente : (Salario básico 1993: \$96.250.00, 1994: \$149.000.00, 1995: \$194.000.00).*

*Teniendo en cuenta el salario básico de la asignación de retiro se procede a liquidar la prima actualización que ordenó el juez en la instancia conforme señala los decretos 25 de 1993 (26%), 65 de 1994 (23%) y 133 de 1995 (17%).*

*(...)*

*Así las cosas, la diferencia de prima actualización a actualizar corresponde al valor anteriormente determinado (año 1993 \$20.062.00, año 1994 \$27.473.00, y año 1995 \$26.439.00), valores que coinciden con el liquidado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (fl.21) y la profesional universitaria del Tribunal administrativo contencioso del Valle, adscrita al juzgado de conocimiento (fl. 141).*

*En consecuencia, la diferencia por concepto de la prima actualización para los años 1993, 1994, y 1995 será actualizada por separado mes por mes utilizando la fórmula anteriormente reseñada.*

*(...)*

*Nótese que la norma prevé que cuanto transcurran seis meses, desde la ejecutoria de la providencia que impone la condena, sin que el beneficiario haya acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva acompañando la documentación exigida para tal fin, se interrumpirá la causación de los intereses desde entonces, vale decir desde la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se presente la solicitud en debida forma, situación que no ocurrió y por tanto en este asunto, no habría lugar a reconocimiento de intereses de ninguna índole, pues quien tenía la carga de la prueba, no demostró que hubiese realizado tal gestión administrativa.*

*No obstante, lo anterior, dicha situación debió haber sido objeto de análisis al momento de librar mandamiento de pago o haberse formulado la excepción respectiva de cesación de intereses lo que en efecto no ocurrió, pero que no impide a esta instancia a despacharlo desfavorablemente.*

*Sin perjuicio de lo anterior y en aras de no dejar duda alguna sobre la liquidación del crédito que, en últimas, es el objeto del recurso sujeto a resolver, se procederá a liquidar el crédito en los siguientes términos.*

*Se calcularán los intereses Los intereses de Mora desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, agosto 13 de 2011, hasta la fecha expedición de la resolución 353 del 4 de febrero 2013, mediante la cual la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, da cumplimiento al fallo judicial y ordena pagar la suma de \$6.141.895 pesos (fl. 18), teniendo*

en cuenta la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme lo establece el artículo 177 del C.C.A., la cual será convertida a tasa efectiva diaria en virtud del concepto de la misma Superintendencia nro. 200 60 22 407 – 02 de 2016.

(...)

Según la liquidación, se establece que la entidad demandada NO adeuda suma de dinero alguna por concepto de diferencias en las asignaciones de retiro por inclusión de la prima de actualización de los años 1993, 1994 y 1995.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca:

**RESUELVE.**

1. CONFIRMAR el auto nro. 204 del 7 de marzo de 2019...”

### **LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN.**

El apoderado judicial de la parte ejecutante, estando dentro del término de ejecutoria del auto proferido en segunda instancia, presentó memorial visible a folios 182 a 187, en el que solicita la “adición” del mismo, bajo los siguientes argumentos:

“...La liquidación del crédito solo hace referencia a la actualización del monto exigible, porque la obligación debida ya fue establecida en el mandamiento de pago y en la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, por esta razón el juez no tiene competencia para realizar una liquidación del crédito diferente a la que se encuentra establecida en el mandamiento de pago, así lo ordena el artículo 446 del código general del proceso y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo estado.

La competencia que tiene el juez para modificar la liquidación aporta al proceso surge cuando dicha liquidación se aparta de la liquidación del crédito establecida en el mandamiento de pago, y le corresponde al juez modificarla y sujetarla en forma estricta al mandamiento de pago que se encuentra en firme; tenemos que la competencia no le permite realizar otra liquidación que desconozca la aprobada en el mandamiento de pago.

(...)

Es pues, la liquidación del crédito un acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento y luego se ordenó seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.

No sobra recordar que, tanto el juez como a las partes, luego de la ejecutoria del mandamiento Ejecutivo, les queda cerrada cualquier posibilidad de incluir nuevos ítems o conceptos no reconocidos previamente en la intimación para el pago. Lo anterior, encuentra sustento legal en lo preceptuado en el numeral primero del artículo 446 del C GP.

(...)

Por otro lado, la liquidación del crédito requiere de la aprobación judicial por mandato expreso del numeral tercero del artículo 446 de la ley 1564 2012, una vez se hayan agotado los trámites y traslados previstos en el numeral segundo del citado precepto.

(...)

Como se observa, al momento de remitir el expediente a la contadora del Tribunal Administrativo del Valle, ya existe una sentencia en firme que decidió el fondo sobre la existencia de la obligación y el momento desde cuándo se hizo exigible las diferencias insolutas por capital hasta el momento de proferirse la sentencia.

De acuerdo con anterior, la parte ejecutante realizó las operaciones aritméticas y liquidó el crédito, determinando el monto a pagar por capital y calculó el valor de los intereses a la fecha de presentación de la liquidación, cálculos que se realizaron de acuerdo a lo señalado en el mandamiento de pago y sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución.

189.



*A la contadora del Tribunal administrativo del Valle, como perito liquidador le correspondía revisar la liquidación que se había presentado, para establecer si los cálculos realizados en ella correspondían a los ordenados el mandamiento de pago y la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución; pero no le está dado entrar a oponerse con otra liquidación espuria desconociendo lo ya resuelto en un proceso que terminó con la decisión que se encuentra firme, donde las partes y el juez tuvieron la oportunidad de realizar sus pronunciamientos dentro de cada etapa, por ello, el a quo no tenía competencia para admitir una de las liquidaciones espurias que realizó la contadora y emitir el auto de sustanciación nro. 204 del 7 de marzo de 2019 por el cual modifica la liquidación presentada por la parte ejecutante.*

*(...)*

*Así las cosas, el juez de instancia al revisar la liquidación de la contadora debió darse cuenta de que era ilegal, por esa razón debió tomar una de 2 soluciones posibles i) solicitar a cargo de la parte actora (previo consentimiento), la revisión u otra liquidación elaborada por un perito de la justicia, y ii) aprobar la liquidación presentada por la parte ejecutada, como quiera que la entidad guardó silencio sobre la liquidación, entendiéndose que está de acuerdo con ella.*

*(...)*

*Así las cosas, Tenemos que el recurso de apelación propuso que la liquidación del crédito debía realizarse con base en la liquidación que se aprobó en el mandamiento de pago y en la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, y qué liquidación del crédito realizada por la contadora perito del Tribunal Administrativo del Valle y aprobada por el juez de instancia, era diferente a la que contiene el mandamiento de pago, por esa razón se violaba el artículo 446 del código general del proceso y se apartaba del precedente jurisprudencial, porque desconocían mandamiento de pago y la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, el Tribunal lo corrobora en la parte transcrita que antecede el auto que nos ocupa.*

*(...)*

*El Tribunal administrativo del Valle, en el auto comentado afirma que la liquidación del crédito debe sujetarse estrictamente mandamiento de pago y paradójicamente realiza una nueva liquidación con la cual deja sin vigencia obligatoria del mandamiento de pago cayendo en contradicción.*

*La Corporación Administrativa del Valle, para confirmar el auto apelado deberá sustentar suficientemente que cuenta con competencia material para realizar nueva liquidación del crédito, diferente a la liquidación del crédito aprobado en el mandamiento de pago que se encuentra en firme, nueva liquidación que despoja al mandamiento de pago y a la sentencia que ordenó seguir adelante de su ejecutividad, obligatoriedad y claro entendimiento, siendo uno de los extremos de la litis que no fue objeto de pronunciamiento..."*

## II. CONSIDERACIONES

### EL MECANISMO PROCESAL DE ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE PROVIDENCIAS.

Sobre la figura de la Aclaración de providencias, el artículo 285 del Código General del Proceso, dispone:

**“Art. 285.** La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

*En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.*

*La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”*

El artículo 286 de la misma norma sobre la corrección de providencias, dispone:

**“Art. 286.-** Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

*Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.*

*Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella.”*

Respecto de la **Adición** de providencias, el artículo 287 Ibidem establece:

**“Art. 287.** Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

*El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.*

*Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.*

*Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”*

El Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección C, con ponencia del Dr. ENRIQUE GIL BOTERO, en Sentencia del 3 de diciembre de 2012, sobre el tema de la figura procesal de la Adición de providencias, dispuso:

**“...1.2.** El instrumento procesal de la adición de autos o sentencias.

*La adición de providencias es procedente, bien que se trate de autos o de sentencias, tal y como lo establece el inciso final del artículo 311 del C.P.C., motivo por el cual se trata de una figura procesal que opera para cualquier tipo de providencia judicial.*

*La finalidad de la adición de la sentencia, es garantizar una etapa procesal en la cual el juez pueda constatar, de oficio o a petición de parte, la ausencia de decisión o resolución de uno de los extremos de la litis o de cualquier aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento expreso.*

*En ese orden de ideas, con este instrumento se brinda al juez la posibilidad de que corrija lo que, en términos generales, se conoce como un fallo citra petite, es decir, se faculta al operador judicial para que, ante la verificación de la ausencia de una manifestación en relación con un determinado punto de la controversia, realice un pronunciamiento a través de una sentencia complementaria, en la cual se resuelvan los supuestos que no fueron objeto de análisis y, por consiguiente, de decisión. Ahora bien, si la petición de complementación se niega, la providencia revestirá la naturaleza de auto, en vez de sentencia, tal y como lo ha señalado la doctrina:*

*“La providencia que adiciona otra es de igual naturaleza y se notifica lo mismo que la providencia adicionada; es decir, si se trata de auto, como auto, y si se trata de*



*sentencia, como sentencia. Pero la providencia que deniega la adición de la sentencia, es un auto, de acuerdo con el contenido del artículo 311".*  
(...)"

## CASO CONCRETO

De conformidad con lo expuesto, es claro para esta Corporación que la solicitud de adición presentada por del apoderado judicial de la parte ejecutante, no tiene vocación de prosperidad alguna, pues su petición no contiene nuevos, ni diferentes argumentos a los ya expuestos en la sustentación del recurso inicial, ni mucho menos hacen referencia a algún asunto que se haya omitido resolver, máxime cuando es evidente que cada cuestionamiento del apoderado judicial fueron debidamente resuelto en la providencia que desato el recurso de apelación.

Así entonces, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 287 del C.G.P., es claro que la solicitud de adición procede únicamente cuando se omite resolver cualquier punto de la litis.

En consecuencia, de los argumentos expuestos la Sala no encuentra asuntos pendientes por decidir puesto que mediante auto nro. 760 del 25 de octubre de 2019 se resolvió en su totalidad la materia objeto del recurso de apelación formulado por el ejecutante, que no es otra cosa que su inconformidad respecto a la liquidación del crédito debidamente efectuada por el a quo y esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en Sala de decisión,

## RESUELVE

**PRIMERO.- NEGAR** la solicitud de adición presentada por la parte ejecutante del auto nro. 760 del 25 de octubre de 2019, por las razones expuestas.

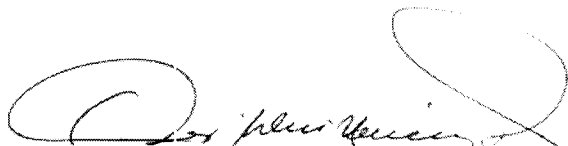
**SEGUNDO.-** Una vez ejecutoriado el presente auto y corrido el término de ejecutoria del mismo devuélvase al despacho de origen para lo pertinente.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta Número \_\_\_\_).

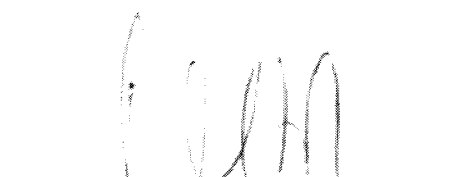
## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los  
magistrados,

Los Magistrados,

  
ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

  
EDUARDO ANTONIO LUGO BARROS

  
OMAR EDGAR BORJA SOTO